

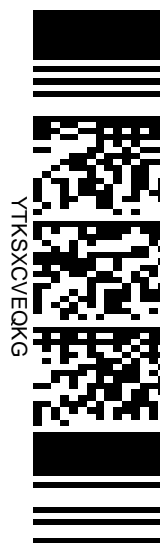
Chillán, catorce de noviembre de dos mil veintidós.

Vistos:

1°.- Que, comparece abogada defensora penal María Belén Acuña Quiñones, en representación de doña **Melissa Aravena Navarrete** actualmente en prisión preventiva en causa RIT 679-2022 del Juzgado de Garantía de Chillán en el C.C.P Chillán, quien deduce acción de amparo en contra de la resolución de fecha 7 de noviembre del presente año del Juzgado de Garantía de Chillán, la cual, mediante un acto arbitrario e ilegal negó lugar a la petición de dejar sin efecto el traslado de su representada desde el C.C.P de la comuna de Chillán hasta el C.C.P de la comuna de Concepción, acto que atenta en contra de su seguridad individual, transgrediendo diversas normas internacionales, legales y constitucionales y solicita que se deje sin efecto dicho traslado .

Para fundar el recurso la letrada indica que con fecha 1 de marzo de 2022 la amparada fue formalizada por un delito de tráfico ilícito de pequeñas cantidades, decretándose a su respecto la medida cautelar de prisión preventiva; que con fecha 24 de octubre de 2022 mediante oficio n° 7356, Gendarmería de Chile informa al tribunal de un procedimiento sancionatorio en el que se habría visto envuelta su representada, a raíz del cual, y atendido su “índice de compromiso delictual” se hacía necesario su traslado a otra unidad penal; que el Juzgado de Garantía de Chillán accedió a dicho traslado; y que el evento sancionatorio fundante del traslado fue notificado finalmente a la defensa con fecha 25 de octubre del presente año, casi un mes después del hecho, y una vez que ya se había solicitado el traslado de la amparada.

Añade que en los documentos remitidos al tribunal se señala que doña Melisa Aravena el día 29 de septiembre de 2022 habría portado entre su ropa interior, un teléfono celular, siendo sorprendida a través de las cámaras de vigilancia, por lo que se inicia un procedimiento para la incautación del aparato, momentos en los cuales la imputada se habría resistido al mismo y habría agredido físicamente a las funcionarias que participaron en el procedimiento, producto de lo cual éstas resultaron con lesiones de carácter leve, al igual que la imputada; que su representada niega categóricamente dichas acusaciones, dado lo cual se solicitó copia de las grabaciones además de una audiencia de cautela de garantías, la cual finalmente se celebró el día 7 de noviembre de 2022, donde se solicitó se dejara sin efecto la sanción de fecha 29 de septiembre de 2022 por agresiones contra funcionarios de Gendarmería, y se pidió además se dejase sin efecto el traslado autorizado.



Indica que la solicitud formulada al tribunal se funda en que el artículo 82 de DS 518 indica, en lo pertinente, que el procedimiento sancionatorio debe ser justo, esto es oportuno y proporcional, cuestión que en el caso de marras no se da, pues el hecho que da inicio al mismo ocurrió el día 29 de septiembre y casi un mes después, el día 25 de octubre, se puso en conocimiento de los intervinientes, de modo que no se dio un procedimiento oportuno ni proporcional en cuanto a las consecuencias que trajo consigo.

Destaca que la imputada sólo tenía una sanción anterior por tenencia de un aparato celular; que su grado de compromiso delictual es mediano; que presenta arraigo familiar en la ciudad de Chillán, donde vive su madre, que sufre de una serie de enfermedades y que tiene a su cuidado al hijo pequeño de la amparada, todo lo cual le impedirá el traslado hasta la ciudad de Concepción para poder visitarla; que la imputada se encuentra actualmente sometida a constantes controles debido a un cáncer mamario que la aqueja, teniendo autorizada la salida desde el recinto penitenciario hasta el Hospital Clínico Herminia Martín y que dicha situación de salud podría verse incrementada debido al traslado dispuesto.

Asimismo, indica que en el video que se allegó por parte de gendarmería y que pudo ser exhibido en la audiencia, se puede ver que la amparada es reducida por las funcionarias, que se le ve de rodillas en todo momento sin que se evidencie una agresión de su parte a ninguna de las gendarmes; y que a pesar de todo lo expuesto, no se hizo lugar por parte de la magistrada Antonieta Núñez, sin dar ningún argumento respecto del procedimiento, que afecta notoriamente el derecho a defensa de la imputada frente a la autoridad administrativa. Así entonces, esta decisión de traslado es arbitraria y carente de contenido lo suficientemente serio y categórico como para alejarla de la ciudad de su arraigo familiar y social a pesar de su situación procesal, privando así de la posibilidad de contacto con su familia y de acceder de manera rápida y eficaz a sus médicos tratantes de cabecera.

Estima que de lo expuesto se desprende que el traslado de doña Melisa Aravena Navarrete constituye un acto arbitrario e ilegal que atenta en contra de su seguridad individual desde que el procedimiento en el que se funda afecta notoriamente el derecho a defensa frente a la autoridad administrativa.

Sostiene que el procedimiento en que se funda la resolución de traslado atenta contra las garantías de la amparada, no sólo desde un punto de vista penal, sino también teniendo en cuenta que la resolución de GENCHI es un acto administrativo propiamente tal. Añade que la garantía del debido proceso que

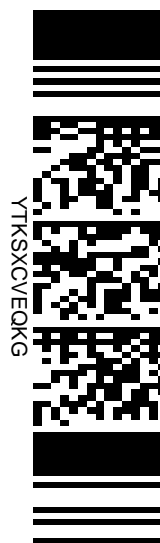


reconoce el Art. 19 N° 3 inc. 5°, en el ámbito administrativo se manifiesta en una doble perspectiva: a) el derecho a defensa que debe ser reconocido como la oportunidad para el administrado de hacer oír sus alegaciones, descargos y pruebas y también b) como el derecho de exigir de la Administración Pública el cumplimiento previo de un conjunto de actos procedimentales que le permitan conocer con precisión los hechos que se imputan y las disposiciones legales aplicables a los mismos”. Dado lo cual, es indudable a lo menos la manifiesta negligencia del órgano administrativo en no informar oportunamente y entregar todos los antecedentes.

Destaca que GENCHI tiene un deber especial de custodia de todos los antecedentes que pudieran resultar relevantes para una mejor resolución del conflicto, no sólo en virtud de los principios que informan los actos administrativos, sino porque se trata de personas que se encuentran precisamente bajo su custodia y en que se debe asegurar la posibilidad efectiva de poder ejercer su derecho a defensa. Sin embargo, a pesar de las alegaciones que se expusieron en la audiencia respectiva, la jueza mantuvo de forma arbitraria e ilegal la autorización para el traslado de unidad penal.

Finalmente solicita a esta Corte que se acoja la acción de amparo en contra de la resolución de fecha 7 de noviembre de 2022, pronunciada por la Magistrada Antonieta Núñez Olave, Jueza del Juzgado de garantía de Chillán, la que mediante un acto ilegal y arbitrario dispuso el traslado de doña Melissa Aravena Navarrete desde el C.C.P Chillán al C.C.P Bio Bío, disponiendo que dicho acto administrativo sea dejado sin efecto.

2°.- Que, al informar la Jueza Destinada del Juzgado de Garantía de esta ciudad doña Antonieta Núñez Olave, señala que se discutió mediante cautela de garantías un traslado desde el CCP Chillán al CCP Concepción, ya autorizado por el tribunal, a fin de dejarlo sin efecto. Señala que en audiencia se indicó que se aplicaron sanciones a la imputada y el posterior traslado por tener un celular dentro del recinto carcelario y por agresión a funcionarias de gendarmería, existiendo reiteración respecto del primer hecho; que la alegación se centró en debatir respecto de las agresiones, no discutiendo el hecho de tener la imputada un celular en su poder; que la defensa negó que hayan existido dichas agresiones y para fundar su alegación exhibió un video de pocos minutos de duración con una calidad de imagen mediana, donde la imputada aparece ya reducida, no contando, como ha ocurrido en otras ocasiones, con un registro completo, de tal forma que este video en nada varía las circunstancias que se tuvieron a la vista al momento de decretar el traslado ya aprobado por el tribunal. En consecuencia, por no



haberse aportado mayores antecedentes, debe estarse a aquellos que fueron remitidos por gendarmería en su oportunidad, principalmente las actas de salud de ambas funcionarias de gendarmería que indican la descripción de las lesiones sufridas y la declaración de las mismas funcionarias, de tal forma que se confirmó lo ya resuelto. En cuanto a los argumentos de atención de salud respecto de la imputada, sostiene que el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción cuenta con un establecimiento idóneo para tratarla, de tal forma que no se aprecia una vulneración de garantías.

Agrega que el traslado fue evaluado y solicitado por Gendarmería y es aquella institución, de acuerdo a lo que dispone el artículo 3° de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile la que tiene como función principal la de dirigir los establecimientos penales del país, aplicando las normas de régimen penitenciario que contempla la ley y velar por la seguridad al interior de ellos y del mismo modo, el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, contenido en el Decreto N° 518, establece la forma, facultades, derechos de los reos e imputados y las sanciones que se deben aplicar, en resguardo de la seguridad de cada uno de los recintos penitenciarios bajo su custodia, siendo facultad del Director Nacional de Gendarmería "determinar los establecimientos en que los reos rematados cumplirán sus condenas y disponer los traslados de ellos de acuerdo con la reglamentación vigente", de tal forma que se reitera, no se aprecia garantía vulnerada en contra de la imputada.

3°.- Que, el recurso de amparo tiene por objeto que todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, pueda ocurrir a la magistratura a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. El mismo recurso, en igual forma, puede ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

4°.- Que, concordante con lo señalado en el considerando precedente, el recurso de amparo tiene como objeto restablecer el imperio del derecho ante cualquier perturbación, privación o amenaza en el ejercicio de la libertad personal y seguridad individual, que tenga como causa un acto u omisión arbitraria o ilegal.

5°.- Que la abogada recurrente reclama en síntesis que la resolución dictada por la jueza de garantía de Chillán que no dejó sin efecto el traslado de



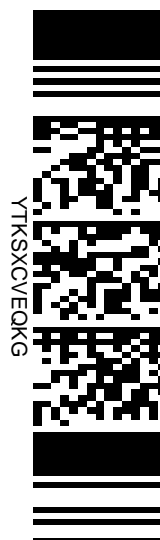
unidad penal de su representada, es ilegal y arbitraria en atención a que el procedimiento seguido por Gendarmería no fue notificado desde su inicio a la defensa y no se acreditaron los hechos que se le imputaron; y que el traslado dispuesto vulnera su arraigo familiar y su derecho de acceder a la salud en su condición de paciente del Hospital Herminda Martin por un diagnóstico de cáncer de mamas.

6°.- Que, primeramente, se debe tener presente que Gendarmería de Chile es un Servicio Público dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la Ley. Así lo establece el artículo 1° del D.L. 2859, Ley Orgánica de Gendarmería.

A su vez el artículo 3° señala, en lo pertinente que: “Corresponde a Gendarmería de Chile: a) Dirigir todos los establecimientos penales del país, aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley y velar por la seguridad interior de ellos.”

7° Que el Decreto Supremo N° 518 de 1998, que contiene el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, señala en su artículo 1° que “La actividad penitenciaria se regirá por las normas establecidas en ese reglamento y tendrá por fin primordial tanto la atención, custodia y asistencia de detenidos, sujetos a prisión preventiva y condenados, como la acción educativa necesaria para la reinserción social de los sentenciados a penas privativas de libertad o sustitutivas de ellas.”

El artículo 28 del mismo Reglamento prescribe que los Directores Regionales de Gendarmería de Chile tienen la facultad de disponer el ingreso o traslados a departamentos, módulos, pabellones o establecimientos especiales de los penados cuya situación haga necesaria la adopción de medidas dirigidas a garantizar la vida e integridad física o psíquica de las personas y el orden y seguridad del recinto. Este régimen de seguridad, agrega el inciso 3°, no tendrá otro objetivo que la preservación de la seguridad de los internos, sus compañeros de internación, del régimen del establecimiento, de los funcionarios y de las tareas impuestas a la administración, en cuyo su cumplimiento se observarán todas las normas de trato humanitario. Se establece asimismo que la adopción de alguna de estas medidas debe estar precedida de un informe técnico que las recomiende, la que será revisada con la periodicidad que la propia disposición prevé.



8°. - Que, conforme al marco general que se ha reseñado, cabe anotar en primer término, que Gendarmería de Chile está facultada para disponer el traslado de los internos por las razones legales que allí se indican.

9° Que el artículo 150 del Código Procesal Penal, en su inciso final, prescribe que cualquier restricción que la autoridad penitenciaria impusiere al imputado deberá ser inmediatamente comunicada al tribunal, con sus fundamentos; y que éste podrá dejarla sin efecto si la considerare ilegal o abusiva, convocando, si lo estimare necesario, a una audiencia para su examen.

En el caso, Gendarmería de Chile dispuso el traslado de la imputada a otro establecimiento penitenciario, fundado en que la amparada cometió dos faltas al régimen penitenciario, consistentes en ingresar un teléfono celular a la unidad y agredir a funcionarias de gendarmería, lo que elevó su clasificación en lo relativo a su compromiso delictual. Dicha medida fue comunicada al Juzgado de Garantía de Chillán y ratificada por éste; y, ante tal situación, la defensa solicitó una audiencia de cautela de garantías para revisar nuevamente tal decisión, la que fue convocada por el tribunal.

Entonces, es también un hecho pacífico, que en la audiencia citada al efecto, oyendo los argumentos de la defensa, la señora jueza de garantía ratificó nuevamente la decisión de Gendarmería en cuanto a trasladar a la imputada al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción.

10° Que, en consecuencia, no se advierte que la jueza recurrida haya incurrido en un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el derecho a la libertad personal o la seguridad individual de Melissa Aravena Navarrete, toda vez que la decisión de la jueza, en orden a ratificar el traslado de la imputada, fue adoptada dentro del ámbito de su competencia y mediante resolución fundada, dictada en una audiencia en la que fueron oídos los argumentos de todos los intervinientes.

Finalmente, en cuanto a las alegaciones de la defensa relativas a la afectación de la salud de la imputada, este asunto fue también revisado por la jueza, quien estimó que el centro penitenciario al que será trasladada la imputada cuenta con hospital penitenciario y se encuentra en una ciudad en la que existe un hospital incluso de mayor complejidad que el que actualmente atiende a la amparada, por lo que no se afecta ni su integridad física o psíquica ni su seguridad individual, apreciación y conclusión que es compartida por esta Corte. Asimismo, en el evento que la imputada no reciba en la unidad penal de Concepción la atención médica que requiere, su defensa dispone de las instancias



administrativas y judiciales para instar por el cumplimiento del deber impuesto a la administración penitenciaria por el artículo 6° inciso final del Reglamento de Establecimientos penitenciarios, consistente en velar por la vida, integridad y salud de los internos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **se rechaza** el recurso de amparo deducido por la abogada María Belén Acuña, en favor de doña Melissa Aravena Navarrete, en contra de la Jueza del Juzgado de Garantía de Chillán, doña Antonieta Núñez Olave.

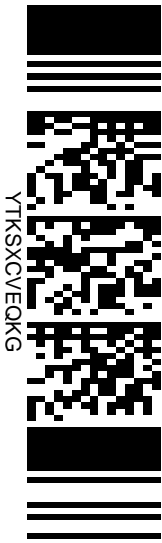
Acordado con el voto en contra de la Ministra señora Gallardo García, quien fue de opinión de acoger la acción cautelar, y en consecuencia dejar sin efecto el traslado de la imputada Aravena Navarrete a la Unidad Penal de Concepción, teniendo únicamente presente, que del mérito de los antecedentes allegados al recurso, y de lo actuado en causa RIT N° 679-2022 del Juzgado de Garantía de Chillán, consta que la amparada presenta una patología mamaria, actualmente en tratamiento en recintos médicos de la ciudad de Chillán.

Es del caso, que desde su ingreso en prisión preventiva en el mes de marzo del año en curso, la situación médica de la imputada ha motivado distintas gestiones de Gendarmería de Chile y de su defensa, a fin de contar con las autorizaciones judiciales para efectuar oportunamente los traslados necesarios para la realización de exámenes y controles médicos. En tal contexto, consta que actualmente recibe atención médica en el Hospital Herminda Martín de esta ciudad, específicamente en la Unidad de Patología Mamaria (GES).

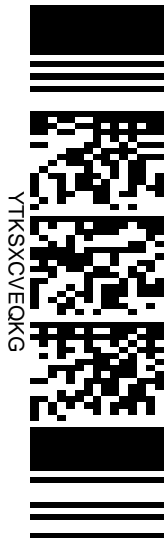
Atendida la situación expuesta, en concepto de esta disidente, el traslado de Unidad Penal, trae aparejada una afectación a la integridad física y psíquica de la señora Aravena Navarrete, por cuanto no existe certeza que ella continúe con el tratamiento médico en los términos que lo ha llevado hasta la fecha, resultando insuficiente para garantizar dicha continuidad, la sola referencia nominal a la existencia de un Hospital Penitenciario en Concepción o a la posibilidad de ser derivada a la red de salud de la Región del Bio Bío, toda vez que, la efectiva atención médica supone una serie de trámites burocráticos - traspaso de ficha médica, interconsultas, etc- que a la fecha no se encuentran debidamente garantizadas por el Estado, en tanto actual custodio de la interna.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y, ejecutoriado, archívese

Redacción a cargo de la Ministra Erica Livia Pezoa Gallegos, y la disidencia a cargo de su autora.



Rol 281-2022 Amparo



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Chillan integrada por Ministra Presidente Paulina Gallardo G., Ministra Erica Livia Pezoa G. y Fiscal Judicial Gabriel Alonso Hernandez S. Chillan, catorce de noviembre de dos mil veintidós.

En Chillan, a catorce de noviembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

